

Plataforma Nacional de Justicia de la Vivienda

Por una Casa Garantizada

SOMOS

Nosotros somos un movimiento de inquilinos, propietarios de vivienda y aliados que estamos construyendo poder y logrando victorias por la justicia de la vivienda en todo el país.

CREEMOS

Nosotros creemos que la vivienda es un derecho humano, no una mercancía que se compra o se vende con fines de lucro. Creemos que a todas las personas se les debe garantizar un lugar asequible, seguro y saludable al que puedan llamar casa. Creemos que las viviendas deben ser accesibles para personas con discapacidades físicas o de otro tipo, así como los centros de trabajo, las escuelas y donde sea que se haya construido una comunidad. Y sabemos que para construir un sistema de vivienda justa debemos empezar ahora.

CRISIS NACIONAL DE LA VIVIENDA

La crisis de la vivienda en el país ha alcanzado niveles de emergencia. Muchas familias gastan más de la mitad de sus ingresos en alquiler, luchando por mantener varios trabajos que pagan muy poco para poder poner dinero en el bolsillo de su arrendador.

El incremento de la falta de vivienda, los desalojos y la inestabilidad de la vivienda son las consecuencias de un sistema que favorece los intereses de Wall Street y las compañías por encima de la salud y el bienestar de nuestras familias y nuestras comunidades.

No tiene que ser así. Estamos en un momento de cambio increíble, en el que la gente lucha por la asistencia médica universal, por santuarios para los inmigrantes, por la gratuidad de la universidad y el Nuevo Acuerdo Verde. Tenemos que ser igual de audaces y exigir que haya vivienda para todos. Esa es la razón por la cual los inquilinos, residentes de viviendas prefabricadas, propietarios de vivienda y miembros de la comunidad de todo el país se unen para trazar el camino a seguir.



I. CREAR VIVIENDA SOCIAL ASEQUIBLE CONTROLADA POR LA COMUNIDAD

Toda persona merece una vivienda que le permita vivir dignamente, independientemente de su nivel de ingresos. Nadie debería tener que escoger entre pagar el alquiler y tener suficiente comida o medicina. Y todo el mundo debería ser capaz de cubrir sus costos de vivienda, incluyendo los servicios públicos domiciliarios, y seguir teniendo lo suficiente para cubrir el resto de sus necesidades básicas. Nuestra política pública debería garantizar ese estándar de vida básico.

II. PROTEGER A INQUILINOS Y DEUDORES HIPOTECARIOS CONSECUENCIA DEL DESPLAZAMIENTO

El desalojo es un evento devastador que tiene repercusión sobre la salud, la educación, el empleo y el acceso futuro a la vivienda. Necesitamos nuevas protecciones que eviten que los arrendadores y los prestamistas desplacen a la gente y destruyan comunidades en busca de ganancias cada vez más altas.

III. PROPORCIONAR REPARACIONES POR SIGLOS DE POLÍTICAS RACISTAS DE VIVIENDA Y DE TERRENO, ROBO DE TIERRAS INDÍGENAS; FORTALECER Y HACER CUMPLIR LA LEY DE VIVIENDA JUSTA

Nuestra política de vivienda debe realmente dismantelar el legado de exclusión y explotación racista y proporcionar una restitución. La vivienda, por ubicación y diseño, debe fomentar la inclusión de sus residentes, incluyendo a aquellos que se encuentran sin techo. Las comunidades históricamente marginadas deben liderar la toma de decisiones relativa a la vivienda y al desarrollo comunitario.

IV. DESCOMERCIALIZAR LA VIVIENDA Y REGULAR WALL STREET

La propiedad de la vivienda y la tierra debería ser democrática y controlada por miembros de la comunidad, no por Wall Street y las empresas. Necesitamos regulaciones financieras fuertes que desincentiven la titularización y la especulación motivada por el lucro de nuestras viviendas.

V. ASEGURAR QUE TODAS LAS VIVIENDAS SEAN SALUDABLES Y SOSTENIBLES

La vivienda es el cimiento de las comunidades saludables y sostenibles. La política de vivienda debería buscar maximizar el bienestar de los residentes y los trabajadores y promover la resiliencia climática, la energía limpia y renovable y los sistemas de agua seguros y asequibles.

I. CREAR VIVIENDA SOCIAL, ASEQUIBLE, CONTROLADA POR LA COMUNIDAD

Toda persona merece una vivienda que le permita vivir dignamente, independientemente de su nivel de ingresos. Nadie debería tener que escoger entre pagar el alquiler y tener suficiente comida o medicina. Y todo el mundo debería ser capaz de cubrir sus costos de vivienda, incluyendo los servicios públicos domiciliarios, y seguir teniendo lo suficiente para cubrir el resto de sus necesidades básicas. Nuestra política pública debería garantizar ese estándar de vida básico.

La vivienda estable es el cimiento de las familias y las comunidades saludables. Sin ella, la salud física, mental y emocional de las familias y los individuos se ve afectada. A menudo, el desempeño escolar de los niños disminuye.

Estados Unidos tiene un déficit de millones de unidades adicionales de vivienda asequible. La brecha entre necesidad y disponibilidad es producto de las fallas del mercado privado con ánimo de lucro, así como de la desinversión del gobierno federal en programas que crean viviendas asequibles.

El gobierno federal no ha hecho inversiones a gran escala para solucionar el déficit de vivienda asequible desde el Nuevo Trato de Franklin D. Roosevelt, que creó nuestro sistema de vivienda pública. Ahora, necesitamos tomar medidas incluso a mayor escala. La crisis de vivienda del país es insostenible y debe terminar.



NOSOTROS NECESITAMOS

- La construcción de 12 millones de nuevas unidades de vivienda social en la próxima década, que no estén a precios de mercado y que prioricen la propiedad y el control comunitarios.
- Financiamiento federal para subsidiar las viviendas adecuadamente, de modo que la gente de todos los niveles de ingresos pueda pagar su vivienda, al igual que sus necesidades básicas para una vida digna.

II. PROTEGER A INQUILINOS Y DEUDORES HIPOTECARIOS DEL DESPLAZAMIENTO

El desalojo es un evento devastador que tiene repercusión sobre la salud, la educación, el empleo y el acceso futuro a la vivienda. Necesitamos nuevas protecciones que eviten que los arrendadores y los prestamistas desplacen a la gente y destruyan comunidades en busca de ganancias cada vez más altas.

Hoy en día, más de 43 millones de familias estadounidenses viven en viviendas alquiladas. Esa cifra continúa en crecimiento, especialmente entre las comunidades de bajos ingresos, las comunidades de clase obrera de color y las comunidades inmigrantes que se han quedado rezagadas y excluidas.

En la mayor parte del país, los inquilinos y residentes de comunidades de viviendas prefabricadas carecen de protecciones mínimas contra el desalojo por estar en manos de arrendadores inescrupulosos y especuladores que pueden duplicar y triplicar los alquileres en un solo año. Sin dichas protecciones, los arrendadores tienen la libertad de adoptar prácticas predatorias, desplazando a inquilinos y perpetuando la inseguridad de la vivienda. A menudo, las poblaciones más marginalizadas sufren los impactos de amplio alcance de los desalojos: las mujeres afroamericanas presentan las tasas más altas de desalojo.



NOSOTROS NECESITAMOS

- Un control universal de arriendos
- Leyes universales de desalojo por justa causa
- Inversión federal en fondos contra el desplazamiento que sean controlados por las comunidades
- El derecho al regreso de los residentes desplazados

III. PROPORCIONAR REPARACIONES POR SIGLOS DE POLÍTICAS RACISTAS DE VIVIENDA Y DE TERRENO, ROBO DE TIERRAS INDÍGENAS; FORTALECER Y HACER CUMPLIR LA LEY DE VIVIENDA JUSTA

Nuestra política de vivienda debe realmente dismantelar el legado de exclusión y explotación racista y proporcionar una restitución. La vivienda, por ubicación y diseño, debe fomentar la inclusión de sus residentes, incluyendo a aquellos que se encuentran sin techo. Las comunidades históricamente marginadas deben liderar la toma de decisiones relativa a la vivienda y al desarrollo comunitario.

La segregación constante, los altos índices de pobreza de los pueblos indígenas y la enorme brecha de riqueza racial son una característica, no una falla, de nuestro sistema de vivienda. Estos son el resultado del robo sistemático de tierras, la exclusión del acceso al capital y las políticas de supremacía blanca diseñadas para impedir que la gente afroamericana, de color, asiática e indígena tengan casa propia. Esas políticas deben ser dismanteladas de forma activa y debe haber una indemnización para así empezar a llevar justicia y equidad al sistema de vivienda.

Además, el gobierno federal debe asegurar que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano esté a la altura de su mandato no solo haciendo cumplir las leyes contra la discriminación sino promoviendo positivamente la vivienda justa.



NOSOTROS NECESITAMOS

- Reparaciones para solucionar el robo histórico de tierras indígenas, incluyendo la reducción del capital y los préstamos con cero intereses para las comunidades afroamericanas y de color afectadas por las políticas racistas de vivienda y de ordenamiento territorial
- Poner fin a la discriminación por ingresos y a todas las políticas que discriminan a los inquilinos
- Plena elegibilidad para los recursos de vivienda, independientemente del estatus migratorio o de antecedentes penales
- La prohibición federal de las leyes de vivienda unifamiliar u otras leyes de zonificación excluyentes
- El compromiso de HUD para reinstaurar, fortalecer y hacer cumplir la regla de Promoción Activa de la Equidad en la Vivienda (AFFH por sus siglas en inglés)

IV. DESCOMERCIALIZAR LA VIVIENDA Y REGULAR WALL STREET

La propiedad de la vivienda y la tierra debería ser democrática y controlada por miembros de la comunidad, no por Wall Street y las empresas. Necesitamos regulaciones financieras fuertes que desincentiven la titularización y la especulación motivada por el lucro de nuestras viviendas.

El mayor control de Wall Street y el capital privado sobre las unidades de alquiler ha exacerbado la crisis de la vivienda. La historia de la mercantilización de la vivienda en los Estados Unidos es larga, pero en las últimas décadas ha visto una peligrosa aceleración. Los dueños corporativos están expandiendo su alcance desde edificios de apartamentos multifamiliares en ciudades con alquileres altos hasta viviendas para estudiantes, comunidades de viviendas prefabricadas, conjuntos de apartamentos de alquileres bajos y casas unifamiliares en todo el país.

En muchos sitios del país, es casi imposible que una persona promedio de ingresos bajos o moderados pueda competir con una empresa multinacional en la compra de una casa. Las prácticas de esos actores de capital privado, que buscan enriquecerse con el desplazamiento y la gentrificación, han llevado al deterioro de las condiciones y al alza de los costos de vivienda para los inquilinos de bajos ingresos o de clase obrera que viven en sus inmuebles. Fuertes regulaciones financieras adicionales protegerán tanto a los inquilinos como a los compradores de viviendas al limitar el papel que puede jugar el capital privado.



NOSOTROS NECESITAMOS

- Poner fin al apoyo — y a las ventas — del gobierno a las corporaciones predatorias que están comprando viviendas y comunidades
- Que haya una regulación fuerte que incluya transparencia e imposición tributaria justa de las empresas de construcción e inversión en bienes raíces
- Financiamiento y política preferencial para la propiedad cooperativa y sin fines de lucro, fideicomisos inmobiliarios comunitarios y otros modelos que faciliten la adquisición de vivienda pública y de los residentes

V. ASEGURAR QUE TODAS LAS VIVIENDAS SEAN SALUDABLES Y SOSTENIBLES

La vivienda es el cimiento de las comunidades saludables y sostenibles. La política de vivienda debería buscar maximizar el bienestar de los residentes y los trabajadores y promover la resiliencia climática, la energía limpia y renovable y los sistemas de agua seguros y asequibles.

Treinta millones de viviendas en los Estados Unidos presentan serios peligros de salud y seguridad. Aproximadamente 77 millones de personas, que viven en esas viviendas peligrosas, enfrentan los efectos físicos y mentales de condiciones habitacionales que incluyen plomo en la pintura, fugas de gas, tuberías averiadas, calefacción deficiente, ratas y moho.

Asimismo, comunidades enteras enfrentan complicaciones de salud y muerte prematura debido a la toxicidad del suelo, aire y agua causada por establecimientos contaminantes y sitios peligrosos cercanos, al igual que por la falta de inversión en la infraestructura. En todo el país, los afroamericanos tienen un 75% más de probabilidades que los blancos de vivir en zonas adyacentes a peligros ambientales derivados de instalaciones de petróleo y gas, como el ruido, los contaminantes tóxicos y las emisiones del tráfico. La población latina tiene un 60% más de probabilidades que los blancos de vivir en dichas áreas. Un millón de afroamericanos vive en áreas donde las toxinas que causan cáncer exceden el “Nivel de preocupación” identificado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), y como consecuencia, corren mayor riesgo de desarrollar cáncer. La fiscalización laxa junto a la falta de protecciones de zonificación residencial y la aplicación de las normas crean peligros de vida a gente que tiene pocos lugares a donde ir. El cambio climático, creado por impactos humanos en el medio ambiente, ya está produciendo un clima más volátil y tormentas más fuertes que a su turno producen nuevos peligros ambientales que dejan más vulnerables a las comunidades de bajos ingresos y a la gente de color. Y está en curso una nueva ola de desplazamiento masivo, alimentada por la crisis climática, que no hará sino agudizarse.

NOSOTROS NECESITAMOS

- Un Nuevo Trato Verde para la Vivienda que genere y rehabilite millones de viviendas construidas por gente que gana salarios dignos y que apoya la salud y el bienestar de nuestro planeta





La vivienda es una necesidad básica y un derecho humano. También es el cimiento de vecindarios en los que todos pueden sentirse seguros y prosperar, donde todos tienen acceso a buenos empleos, escuelas sólidas y servicios públicos fuertes, y en donde los vecinos trabajan juntos construyendo las comunidades que quieren tener.

Por tanto, la vivienda estable y digna es un componente esencial de las causas por las que luchan nuestros movimientos en este momento. Es fundamental para la salud de los individuos y las comunidades, al igual que para la prosperidad de nuestras escuelas y los estudiantes a los que sirven. El verdadero santuario para inmigrantes y refugiados debe incluir la vivienda segura y accesible. Los incrementos en el salario mínimo no son suficientes para los trabajadores que cada mes destinan la mitad de sus ingresos al pago de arriendos. Incluso será difícil para las versiones más sólidas del Nuevo Trato Verde, el poder reducir las emisiones de carbono de manera tan drástica como se requiere, sin los millones de viviendas nuevas sin carbono. En resumen, sin un cambio radical en la política pública vinculada a la vivienda, no obtendremos logros reales en ninguno de los temas urgentes de nuestra época.



ORGANIZACIONES QUE APOYAN

A NIVEL NACIONAL

Action Center for Race and the Economy (ACRE)
 Alliance for Housing Justice
 Bargaining for the Common Good (BCG)
 Center for Popular Democracy
 Homes For All (Organizing Committee)

MHAction
 Partnership for Working Families
 People's Action
 PolicyLink
 Right to the City Alliance

A NIVEL ESTATAL/LOCAL

Alliance of Californians for Community Empowerment Action (ACCE Action)
 Alliance for Community Transit — Los Angeles
 Alliance for Metropolitan Stability
 BASTA, Inc.
 Building Movement Project | Detroit People's Platform
 Causa Justa :: Just Cause
 City Life Vida Urbana
 City-Wide Tenant Union of Rochester
 Community Justice Project
 East Bay Alliance for a Sustainable Economy (EBASE)
 East Bay Housing Organizations
 Equal Justice Society
 Esperanza Community Housing Corporation
 Frogtown Neighborhood Association
 Georgia Stand-Up
 Grassroots Collaborative
 Greater New Orleans Fair Housing Action Center
 Hill District Consensus Group
 Homes For All (Organizing Committee)
 Homes For All Newark (HFAN)
 Inquilinxs Unidxs Por Justicia (United Renters of Justice)
 Investing in Place
 Jane Addams Senior Caucus
 LAANE
 LA Forward

Liberty Resources, Inc.
 Louisiana Fair Housing Action Center
 New York Communities for Change
 NYS Upstate Downstate Housing Alliance
 ONE DC
 ONE Northside
 Organize Sacramento
 Partnership for the Public Good
 People's Alliance for Transit, Housing, and Employment (PATHE)
 People's Housing Coalition of Maine
 Pittsburgh United
 Pittsburghers for Public Transit
 Progressive Leadership Alliance of Nevada
 Public Advocates Inc.
 Puget Sound Sage
 PUSH Buffalo
 Raise-Op Housing Cooperative
 Reclaim Philadelphia
 Social Justice Learning Institute
 Strategic Actions for a Just Economy (SAJE)
 Struggle for Miami's Affordable and Sustainable Housing, Inc.
 United for a New Economy
 Urban Habitat
 Washington Lawyers' Committee for Civil Rights and Urban Affairs
 Western Regional Advocacy Project
 Working Partnerships USA